

LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA EN EL CONO SUR: ARGENTINA, BRASIL Y CHILE

FABIÁN CALLE

Universidad Católica Argentina
CONICET, Consejo de Investigaciones
Científicas y Técnicas
CARI, Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
✉ fabian.calle@cari1.org.ar

Recibido: Septiembre de 2005

Aprobado: Diciembre de 2005

Resumen: El panorama en materia de Defensa en Sudamérica presenta una escena que trasciende los procesos de modernización relevantes, en especial en los casos de Chile y Venezuela. La región presenta la superposición de añejas *rivalidades duraderas* reactivadas cíclicamente por cuestiones limítrofes, por pujas por recursos naturales o por crisis político-sociales que impulsan a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas, sumadas a tensiones étnicas, socioeconómicas y políticas, y a un peso cada vez mayor del narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas livianas, etcétera. Dependerá de la madurez de los decisores y sus sociedades, así como en una constructiva influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y una política constructiva y a largo plazo de los Estados Unidos, que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales.

Abstract: The Defense scenario in South America displays an image that transcends relevant modernization processes, especially in Chile and Venezuela. In the region, long-standing ancient rivalries over geographic boundaries spur up over and over in the struggle to gain natural resources or as a consequence of socio-political crises that impulse certain governments to raise nationalist banners, to which racial, socio-economic, and political tension, ever growing drug trafficking, organized crime, handgun trafficking, etc. are added. Whether or not this crisis gets out of hand and adds even more disturbances and conflicts to the crises mentioned above will depend on the maturity of current decision-makers and their communities as well as on a progressive integration process such as that of Mercosur (which should begin to move towards more political agendas to adjust to the new scenarios) and on constructive long-term political exchange with the United States.

Palabras clave: Política de Defensa. Balance de poder. Armamentismo. Cono Sur. Venezuela. Estados Unidos. Comando Sur.

Key-words: Defense policy. Balance of power. Arming. Southern Cone. Venezuela. United States. Southern Command.

¿El regreso de las carreras armamentistas en Sudamérica? Su potencial impacto en el Cono Sur

En abril de 2005 el gobierno de Venezuela ha iniciado un proceso de modernización de su aparato militar. En este sentido, ha firmado un acuerdo por 120 millones de dólares con Rusia para la adquisición de diez helicópteros (siete de transporte y tres de ataque). Asimismo, está prevista la compra de 100 mil fusiles de asalto AK 103 y 104. Por su parte, se concretó la adquisición de veinte aviones de entrenamiento avanzado Super Tucano de la empresa EMBRAER de Brasil. Por último, se adquirirá por un valor cercano a los 1700 millones de dólares doce aviones de transporte CASA 295, patrulleras navales y corbetas de fabricación española (*Jane's Defence Weekly*, 18/3/05). En el caso concreto de España, a la firma del nuevo contrato con Caracas le precedió la cancelación de la transferencia a Colombia de 40 tanques AMX-30 y aviones Mirage F-1 ofrecida por el ex gobierno de Aznar. Asimismo, Venezuela ha mostrado interés en adquirir en un futuro aviones de combate como el MIG-29 ruso. En este sentido, existen conversaciones también con Brasil para un eventual emprendimiento conjunto en la materia. Todo ello, en un contexto signado por ya casi dos años de elevados valores en el precio del petróleo (si bien en términos reales menores a los existentes durante las crisis energéticas de 1973 y 1979) y con Venezuela como proveedor del 15% del crudo que consumen los Estados Unidos y con 12 mil estaciones de servicio de propiedad del Estado venezolano operando en territorio estadounidense.

La decisión de Caracas he generado resquemores en diversos países del área, pero especialmente en los Estados Unidos y Colombia. En este sentido, Washington ha expresado su inquietud por el proceso de compra de armas y en especial por la decisión de actualizar todo el parque de fusiles de asalto con una nueva versión de fabricación rusa. En este sentido, desde el Pentágono y el Departamento de Estado se plantea el eventual desvío de las decenas de miles de armas dadas de baja al turbu-

lento conflicto en Colombia, y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Americano, Roger Pardo Maurer, afirmó que se está asistiendo al fin de la política que hasta el momento venía desarrollando los Estados Unidos hacia Venezuela y que se aproxima la hora de una nueva estrategia hacia Caracas. Asimismo, agregó que el presidente Hugo Chávez aprovecha la inestabilidad social y política en la región para impulsar sus intereses sobre otros países. No obstante, la incorporación de material bélico más avanzado (aviones, barcos, etc.) por parte de gobierno de Chávez a Brasil, España y Rusia no despiertan el mismo resquemor dado que son considerados material adecuado para conflictos interestatales convencionales, en donde Washington no tiene el riesgo de afrontar tácticas asimétricas, ni pueden ser volcados fácilmente en ayuda de algunas de las partes enfrentadas en territorio colombiano.

El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, general Bantz J. Craddock, afirmó que si bien la posibilidad de guerras interestatales en América Latina son bajas, esa es la zona más violenta del mundo, con una tasa de homicidios del 27,5 por 100 mil habitantes. Como potenciadora de esta situación que afecta la estabilidad política y económica, Craddock citó la pobreza, la corrupción y la inequidad que caracteriza a la región, visto todo ello como terreno fértil para lo que denomino "populismo radical". En cuanto a la corrupción, señaló que hace perder cerca del 10% del PBI cada año a los países del área. Por último, elogió el incremento del presupuesto de Defensa de Colombia del 3,5% al 5,0% y la decisión del presidente Álvaro Uribe de incrementar la presión fiscal para hacer frente a los costos de la guerra y la inseguridad (*The Miami Herald*, 10/11/2004).

En declaraciones formuladas a comienzos de abril del presente año, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, afirmó que los problemas derivados de las actividades de bandas, narcotraficantes, traficantes de armas y secuestradores que se dan en todo el hemisferio y en parte sustancial del mundo, requieren de una activa colaboración y coordinación entre los países. Asimismo, sostuvo que Venezuela no es un actor constructivo en el conflicto que se vive en Colombia, pero también advirtió que no tenía evidencia de una ayuda directa de Caracas a grupos guerrilleros. Por último, calificó de ridículas las versiones sobre un ataque de Estados Unidos a ese país o a Chávez, y alertó sobre un posible regreso a lógicas de carreras armamentistas en la región.

Por su parte, desde Venezuela se argumenta que todo ello es parte de un proceso de actualización y reposición normal del armamento de las Fuerzas Armadas y de seguridad y que tiene como principal objetivo luchar contra el creciente problema del narcotráfico, y la violencia de los grupos armados que operan en la frontera con Colombia. Asimismo, deja trascender que el material bélico en cuestión vendría a compensar en parte las transferencias de armamento desde los Estados Unidos a Colombia dentro del Plan que lleva el nombre de ese país sudamericano (vigente entre el 2000 y el 2004), y el posterior y actualmente vigente Plan Patriota. Aquellos que tienden a ver las Relaciones Internacionales sin colocar todo el énfasis en cuestiones ideológicas recuerdan que Bogotá y Caracas estuvieron por ir a un conflicto armado en 1987 por su diferendo por la delimitación, aun no resuelta, de zonas marítimas ricas en petróleo.

Asimismo, el conflicto interno en Colombia parece distante de un fin. Luego de casi dos años de repliegue de las FARC, un reciente informe de uno de los principales centros de estudios sobre seguridad de Colombia, la Fundación Seguridad y Democracia, afirma que la actual estrategia de repliegue estratégico y ordenado de las FARC no busca el enfrentamiento directo sino el desgaste de las fuerzas estatales. Agrega, que las FARC buscan atacar las unidades móviles de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y no ya sus instalaciones fijas como en el pasado. Ello y otros factores generan un escenario en donde se han incrementado el número de enfrentamientos aunque los mismos son de menos intensidad y se producen menos bajas (durante el gobierno de Pastrana, en cada enfrentamiento eran abatidos 3,0 guerrilleros y 0,6 miembros de la fuerza pública frente a 1,2 y 0,3 respectivamente en la actualidad); otras estadísticas confirman lo anterior. Mientras que el gobierno de Pastrana, según el documento, termina con una proporción de doce guerrilleros muertos por un militar, en el primer año del gobierno de Uribe la relación bajó de 8 a 1; y en el segundo año de Uribe la relación fue de 10 a 1. El documento, de seguir la tendencia registrada en los dos primeros años de la administración Uribe, al final de la presente administración se podría registrar un aumento de 71 por ciento en el número de bajas de militares en relación con los cuatro años del período Pastrana. A ello se ha sumado un conjunto de ataques a gran escala contra las fuerzas estatales tanto en el Sur como en el Norte del país, las cuales han provocado más de 100 bajas entre febrero y abril del presente año (*El Tiempo*, 23/10/04).

Tal como lo advierte D. Mares (2001), en la región sudamericana en general y en el Cono Sur en particular existe aun un fuerte arraigo a visiones de la Defensa nacional ligadas a lógicas de disuasión y balance de poder. En este sentido, si bien se han dado importantes avances a lo largo de los últimos 25 años, la inercia y lo arraigado de estas visiones no son fáciles de cambiar. Un pasado, caracterizado por una “paz violenta” de choques armados limitados, movilizaciones, carreras armamentista y desconfianza, pero casi siempre sin una escalada a grandes guerras. Todo ello complementado por agudos niveles de violencia intraestatal, tal como lo refleja el caso extremos de Colombia. Una compleja y volátil combinación de “dilemas de seguridad” entre Estados y dentro de los Estados. Tal como veremos a lo largo del presente informe, esta inercia queda reflejada en la adquisición de ciertos sistemas de armas, en lo modesto de algunas ejercitaciones combinadas entre las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur y en la existencia de ciertos tonos alarmistas frente a crisis no necesariamente ligadas directamente a la Defensa Nacional. Tal como lo expresara un editorial del diario chileno *El Mercurio* de febrero pasado, “pese a los nobles esfuerzos, los países del siglo veinte no están libres de conflictos con sus vecinos” (*El Mercurio*, 21/2/05). Agrega que se le debe seguir dando prioridad a la inversión en el sector de la Defensa y que los ingresos extra por los elevados precios del cobre se deben reflejar en adquisiciones adicionales de sistemas de armas.

La evolución de la situación en el Cono Sur 2004-2005

El caso de Chile

Una mirada un poco más amplia en términos geográficos, pondría en evidencia que las adquisiciones de sistemas de armas distan de ser meramente una cuestión encapsulada en el extremo Norte de la zona andina. En este sentido, en el Cono Sur, Chile mantiene un presupuesto de Defensa cercano al 4,2% del PBI¹ y un activo programa de adquisición de

1. Este porcentaje es superior al existente en países en situaciones de guerra interna como es Colombia al menos hasta el año 2002. A partir de ese momento, el presupuesto de Defensa de Colombia avanzaría a cifras cercanas al 5% del PBI.

armamentos facilitado por los altos precios del cobre y la Ley Secreta que le asigna el 10% de lo producido por esas exportaciones a un fondo especial de las Fuerzas Armadas. Cabe tener en cuenta, que por segundo año consecutivo se registraron excedentes por 300 millones de dólares por sobre el piso asignado por la Ley del Cobre a las Fuerzas Armadas (240 millones de dólares) para adquisiciones de material bélico. La fuerte alza del precio del cobre durante 2004 fue determinante en este sentido. El Ministerio de Defensa de Chile aclaró que los fondos adicionales en cuestión han sido utilizados para pagar deudas de anteriores compras. En este sentido, se destaca el arribo para comienzos de 2006 de los primeros aviones de combate F-16CD (de un total de diez), de dos submarinos Scorpene de fabricación hispano-francesa así como la decisión tomada por el Ministerio de Defensa en el 2004 de avanzar en la compra de fragatas y destructores misilísticos a Holanda y Gran Bretaña (con un costo de 350 millones), un análisis sobre la posibilidad de aceptar una oferta de los Países Bajos para vender un lote de al menos doce aviones de combate F-16 A/B y un progresivo aumento del número de soldados voluntarios *vis a vis* conscriptos. Asimismo, el año pasado, fuerzas militares de Chile llevaron a cabo un ejercicio en el norte de ese país cuya hipótesis era el enfrentamiento simultáneo con dos países vecinos uno de los cuales pretendía acceder al mar.

El costo final del contrato de compra de 10 aviones de combate F-16CD Block 50 de la empresa Lockheed a la Fuerza Aérea de Chile, superaría los 700 millones de dólares previstos originalmente, aproximándose a los 1.300 millones de dólares. En ese sentido, particular influencia ha tenido la compra de sistemas tales como misiles aire-aire de mediano alcance Derby de fabricación israelí. Frente a ello, la Fuerza Aérea de Chile está considerando no avanzar en una posible compra de aviones F-16CD adicionales y en lugar de ello proceder a mantener en servicio a los aviones Mirage 50 – Pantera (modernizados con tecnología israelí a fines de los años '80 y comienzos de los '90) y analizar la compra aviones F-16 de segunda mano proveniente de Holanda o Turquía (*El Mercurio*, 26/9/04). Dentro del programa de mantenimiento de los Mirage 50, se está concretando la compra a Sudáfrica de doce aviones Mirage/Cheetah (versión modificada por Sudáfrica con asistencia de Israel) para usarlos como piezas y repuestos (*Jane's Defence Weekly*, 29/09/04).

Dentro del programa de adquisiciones conjuntas para las Fuerzas Armadas diseñado por la ex ministra de Defensa de Chile, Michelle Bachelet, se estaría por concretar la adquisición de ocho helicópteros de transporte del tipo CH-47 Chinook fabricados por la empresa Boeing de los Estados Unidos; cinco de estas unidades estarían destinadas al Ejército y tres a la Fuerza Aérea. En el primer caso, serían desplegados en la zona norte del país en tanto que los segundos estarían comisionados a tareas ligadas a la Antártida. Esta compra, se enmarca dentro de las recientes reformas a la Ley Secreta del Cobre con el objeto de darle una mayor coordinación y planificación conjunta a las compras. La fuerte suba del cobre durante el 2003 y 2004 ha incrementado la magnitud de estos fondos especiales (*Jane's Defence Weekly*, 22/09/04); en el año fiscal 2004, los recursos derivados de la Ley del Cobre ascenderían a los 290 millones de dólares.

En lo que atañe al plano político de la Defensa, una de las primeras declaraciones de ministro Ravinet al ser puesto en funciones en la cartera de Defensa en octubre de 2004 fue destacar la necesidad de reforzar los lazos de consulta entre los Ministerios de la región y en especial del Cono Sur “dado que las tensiones diplomáticas terminan en muchos casos en cuestiones relacionadas a la Defensa y la seguridad nacional” (*La Tercera*, 18/10/04). A mediados del 2004, dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), principal partido opositor en Chile, acentuaron sus críticas contra las ministras de Defensa, Michelle Bachelet, y de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear por la debilidad demostrada frente a cuestiones bilaterales con los países vecinos, y en especial con la Argentina y Bolivia. En respuesta a ello, el oficialismo ha subrayado la tendencia de la UDI a utilizar cuestiones sensibles de Estado como banderas meramente electorales (*El Mercurio*, 29/05/04). Por su parte, el presidente Ricardo Lagos afirmó que “tenemos que entender que las relaciones bilaterales con la Argentina no pueden ser sólo gas. Hay mucho más que gas en las relaciones con ellos” (*La Tercera*, 18/05/04). Cabe recordar que en el Libro Blanco de la Defensa de Chile dado a conocer en 1997 figura como una de las tareas del poder militar de ese país la protección de las inversiones chilenas en el exterior.

El nuevo ministro de Defensa de Chile, Jaime Ravinet, destacó su intención de reactivar el tratamiento parlamentario de dos proyectos clave que estaban trabados por las tensiones de la oposición con la ex minis-

tra de esa cartera y actual candidata presidencial, Michelle Bachelet. Los dos proyectos en cuestión son la reforma del sistema de previsual y las modificaciones en el servicio militar.

La crisis que se generó en 2004 entre la Argentina y Chile por la cuestión del abastecimiento del gas, derivó en la decisión de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países de crear un mecanismo de “consulta anticrisis” (*Clarín*, 30/11/04). En este contexto, y en un clima enrarecido por esta cuestión económica y el caso del espionaje al Consulado argentino en Punta Arenas, el ministro de Defensa de la Argentina, José Pampuro, subrayó los progresos logrados en la relación bilateral desde 1984 (momento de resolución del litigio por el Canal de Beagle) y en especial a partir del regreso de la democracia en ambos países. En este sentido, enumeró los ejercicios combinados entre ambos países, la estandarización de datos del presupuesto de Defensa en el marco del proyecto desarrollado con la CEPAL y la existencia de mecanismos permanentes de consulta entre los Ministerios (*Clarín*, 10/02/05). Pocos meses antes, el ministro Pampuro compartió con su par chileno el “ejercicio Solidaridad” desarrollado por efectivos de los dos ejércitos en la zona de Río Turbio y centrado en un simulacro de catástrofe en una mina. Cabe indicar que, a diferencia del caso de los ejercicios entre el Ejército de Argentina y Brasil o de las mismas Armadas, no se tratan de maniobras que implique simulacro de operaciones militares o de mantenimiento de la paz, sino de tareas humanitarias y de rescate. Ello refleja un menor grado de integración y confianza mutua entre las respectivas fuerzas aunque también cabe destacar, que antes de 1997 no existían ni siquiera ese tipo de ejercicios entre los dos Ejércitos.

Uno de los proyectos conjuntos que los Ministerios de Defensa de la Argentina y Chile desean concretar en el corto plazo, es la construcción de patrulleras de alta mar con un peso promedio de 1.800 toneladas y un costo unitario de 25 millones de dólares. Este tipo de embarcaciones contaría con equipamiento destinado a la lucha contra la pesca ilegal, cuidado ecológico de los mares y búsqueda y rescate (*Defense News*, 04/05/05).

Al momento de abandonar su cargo, como primera mujer a cargo del Ministerio de Defensa de Chile, Michelle Bachelet enumeró lo que ella consideró fueron sus principales logros: 1.) una mayor coordinación y criterio conjunto en la utilización de los fondos especiales del cobre; 2.)

un mayor rol en Operaciones Multilaterales de Paz, tal como lo reflejó el rol en Haití; 3.) la adquisición de los aviones de combate F-16CD y las fragatas provenientes de Holanda y el Reino Unido. En cuanto a los temas pendientes, destacó la necesidad de una reforma de fondo en el servicio militar obligatorio (*El Mercurio*, 30/09/04).

El Jefe del Ejército de Chile, general Juan Emilio Cheyre, afirmó que “el Ejército ha logrado una dimensión adecuada” luego del proceso de modernización iniciado a mediados de la década de los '90. Asimismo, consideró necesario llegar a un servicio militar plenamente voluntario si bien reconoció que los mismos ya representan un porcentaje importante y creciente de los soldados bajo bandera (*El Mercurio*, 19/09/04). A su vez, el Comandante de la Armada de Chile, Almirante Villalobos, reafirmó la voluntad de su fuerza de avanzar en un amplio proyecto de renovación de materiales e instalaciones y ratificó la prioridad que para su fuerzas representa el control y seguridad de los pasos marítimos estratégicos de Drake y Magallanes (*El Mercurio*, 08/05/05).

Tanto fuentes de las Fuerzas Armadas como del Poder Legislativo de Chile expresaron su negativa a avanzar en una eventual reducción del nivel de convocatoria de ciudadanos para el servicio militar obligatorio, si bien se considera posible ir incrementando el número de efectivos voluntarios. Al momento de explicar la razón de la negativa a reducir el número de efectivos, las fuentes indicaron “que sería una mala señal para los países vecinos” dado que podría despertar dudas sobre la firme voluntad de Chile de preservar su capacidad militar y disuasiva (*El Mercurio*, 26/05/04).

En Perú, el gobierno de Toledo ha firmado un acuerdo de cooperación con Rusia para avanzar en un proceso de modernización de material aéreo de las Fuerzas Armadas; parte del programa será financiado con un crédito ruso de 200 millones de dólares. También se ha establecido un acuerdo con Francia tendiente a actualizar los aviones de combate Mirage 2000 adquiridos en la década de los '80. Un informe elaborado en Perú a partir de fuentes de datos de los Estados Unidos afirma que el poder bélico de Chile es en promedio 5 veces superior al del Perú. En el caso de los Ejércitos, la diferencia sería de 7 a 1, en el caso de la Fuerza Aérea de 3 a 1 y de 4 a 1 en el caso de las Marinas (*La República*, 09/03/04). Todo ello complementado por la decisión de adquirir fragatas provenientes de la Marina Italiana y la decisión política y diplomá-

tica de desconocer la demarcación marítima establecida con Chile a comienzos del siglo pasado. En octubre de 2004, la Cancillería de Lima afirmó que no descarta recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para resolver el diferendo con Chile por la cuestión de la delimitación marítima. A ello se suma, la acusación del gobierno de Lima al de Santiago sobre la supuesta venta de armamento a Ecuador durante la guerra que ese país sostuvo con Perú en 1995.

El Ejército de Chile llevó a cabo en agosto de 2004 un amplio ejercicio de guerra en la región norte del país (Iquique), el cual contó con la presencia de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y del general Juan E. Cheyre. La simulación se centró en una eventual guerra con dos países limítrofes, uno de los cuales pretendería obtener la salida al mar para exportar sus recursos naturales (*La Tercera*, 05/08/2004). Asimismo, el entonces ministro del Interior de Chile, Miguel Insulza, afirmó que Chile no aceptará un eventual pedido del Perú de revisar la actual frontera marítima entre ambos países y que esta postura se ratificará frente a eventuales tribunales internacionales que Lima esté interesado en involucrar en este tema (*La Tercera*, 09/08/2004, *El Mercurio*, 09/08/2004).

Por todo lo antes descrito, las Fuerzas Armadas de Chile se encuentran operando en un ambiente de sustancial satisfacción presupuestaria, amplios programas de reequipamiento y con la presencia de un diálogo constructivo con el poder político encarnado en el Ministerio de Defensa. El énfasis operacional sigue estando en la Defensa frente a amenazas de otros Estados, si bien también es evidente la voluntad de incrementar la presencia en Operaciones Multilaterales de Paz (tanto en sus fases de imposición como de mantenimiento de la paz) tal como queda reflejado en el caso de Haití.

El caso de Brasil

En el caso de Brasil, su ministro de Defensa y vicepresidente, José Alencar, anunció recientemente la decisión de cancelar el programa de adquisición de 12 a 24 aviones de combate caza (competían el F-16E de los Estados Unidos, el Mig 29 ruso, el Gripen sueco-británico, el Mirage 2000-5 francés y el SU 35 ruso). Los argumentos del ministro de Defen-

sa Alencar fueron que no existe apuro y que aparecerá en el mercado, en especial dentro de tres a cuatro años, una nueva generación de aviones y tecnologías. Frente a esto, Brasil ha recibido ofertas de aviones F-16 de segunda mano de los Estados Unidos (si bien capacitados para disparar misiles aire-aire de mediano alcance AMRAAM), de Francia con Mirage 2000C de segunda mano y de Israel con aviones Kfir. Holanda y Bélgica también le han ofrecido vender aviones F-16 A y B (sin misiles, pero dotados con el software para poder hacerlo); tal como indicáramos, también la Fuerza Aérea de Chile ha mostrado interés en esta oferta. No obstante esta cancelación, la Fuerza Aérea de Brasil sigue adelante con el proceso de modernización con tecnología israelí de 46 aviones de combate F-5E de fabricación estadounidense. La última unidad sería acondicionada para el año 2010. El programa de actualización del poder aéreo se completará con 76 aviones turbohélice Super Tucano (que operarán el Amazonas dentro del sistema SIVAM y con un costo total de 380 millones de dólares) y 53 aviones de ataque a tierra tácticos AM-X.

El gran peso económico y político de la empresa aeronáutica brasileña EMBRAER ha llevado a que desde el Legislativo y aun desde el Ejecutivo se haya reforzado en los últimos años la tendencia a poner como condición para adquirir material aéreo extranjero el desarrollo de *joint ventures* con esta compañía. En este sentido, entre los motivos posibles para la cancelación antes mencionada en la adquisición de nuevos aviones de combate cazabombarderos figurarían la posibilidad que la empresa Dassault de Francia, accionista de EMBRAER desde 1999, invite a Brasil a participar en la fabricación del avión Rafael de última generación. No obstante, este creciente estímulo estatal a empresas de fabricación de armamentos se extiende también a casos como IMBEL, propiedad del Ejército (*Jane's Defence Weekly*, 20/04/05) y aun de compañías privadas.

El gobierno del presidente Lula en Brasil da muestras de la voluntad de revigorizar sus capacidades en el sector de la Defensa y la seguridad. En este sentido, su ministro de Defensa destacó en marzo del presente año la decisión de potenciar su presencia en el mercado internacional y regional de armamentos así como el nivel de desarrollo de su industria militar. Del actual nivel de exportaciones cercano a los 300 millones de dólares, se busca volver a niveles cercanos a los 1.500 millones que se daban a fines de la década de los '80. Para ello, el Ministerio de Defensa,

las Fuerzas Armadas y las empresas privadas han diseñado recientemente un “Programa Nacional de la Industria Militar”. El mismo implica incentivos fiscales, créditos a la exportación y proyectos de investigación entre universidades y el sector privado. En este contexto, en septiembre de 2004, el gobierno de Lula autorizó un aumento de 300 millones de dólares en el presupuesto de Defensa del año 2005. Diversos analistas, destacan la influencia que en este proceso tendría el creciente temor de mayores grados de violencia e inestabilidad en Colombia y la zona andina, así como la aspiración del Brasil a ser incorporado como miembro permanente sin poder de veto en una eventual reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A ello se suma la puesta en funcionamiento de parte sustancial del sistema de Vigilancia Amazónica SIVAM (compuesto por una sofisticada combinación de 19 radares, sensores terrestres, 8 aviones dotados de radar e inteligencia electrónica y satélites) destinados a controlar el espacio aéreo y terrestre de parte sustancial de la zona amazónica, y en especial la frontera con Colombia y Venezuela. Antes de la puesta en funcionamiento del SIVAM, la Fuerza Aérea del Brasil tenía capacidad de control aéreo sobre sólo el 15 al 20% del Amazonas (*Aviation Week & Space Technology*, 12/07/04). La inversión de Brasil en este proyecto iniciado en 1994 junto a la empresa Raytheon de los Estados Unidos superó los 1.400 millones de dólares. Durante el año 2003, el SIVAM detectó un total de 4.128 vuelos ilegales (*The New York Times*, 25/07/04). Todo ello, refleja una doctrina de Defensa que se orienta crecientemente al control del Amazonas y la lucha contra actores no estatales como el narcotráfico, tráfico de armas y grupos armados extranjeros que se quieran infiltrar en el país. A lo largo del año 2004, los gobiernos de Brasil y de los Estados Unidos desarrollaron conversaciones con el propósito de lograr una armonización entre el proyecto de Ley sobre derribo de aviones que se abordó en el Poder Legislativo de Brasil y la legislación estadounidense en la materia (*O Globo*, 29/05/04).

Dentro de ese esquema, cabe entender la reglamentación a mediados de 2004 de la “Ley de derribo” de aviones sospechados de realizar actividades ilegales, la reglamentación y el desarrollo de planes de operaciones para enmarcar un creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de respaldo a las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad interior, así como la decisión de reforzar fuertemente la presencia de fuerzas de se-

guridad (con respaldo de las Fuerzas Armadas) en la zona de la Triple Frontera. En este sentido, ha decidido avanzar en un conjunto de medidas tendientes a reforzar la seguridad en la zona de la Triple Frontera, calificada por fuentes nacionales e internacionales como un espacio fuertemente ligado a tareas de contrabando, narcotráfico, piratería, robo de autos y financiamiento del terrorismo internacional. Entre estas medidas, se destaca la inauguración de una estación modelo de la Policía Federal en Foz do Iguazú, la creación de un moderno núcleo de la Policía Marítima y el patrullaje aéreo de las áreas consideradas críticas. Asimismo, se coordinará con los sistemas de seguridad electrónicos y humanos con que cuenta la represa de Itaipú. Desde los hechos del 11 de septiembre de 2001 y frente a la creciente presión internacional sobre la zona de la Triple Frontera, más de 12 mil ciudadanos de origen árabe han abandonado las principales ciudades de esta zona (Ferrardas 2004).

En un reciente informe elaborado por la UNESCO titulado “El Mapa de la Violencia 4 – Los jóvenes en Brasil”, se destaca que: 49.640 brasileños fueron asesinados durante el año 2002 (136 por día), que ese país es el cuarto en el ranking de homicidios en el mundo sólo superado por Colombia, El Salvador y Rusia, que en diez años fueron asesinadas en Brasil cerca de 400 mil personas y que el narcotráfico controla la mayoría de las favelas (*La Nación*, 13/06/2004). Según las estadísticas de las Naciones Unidas, el total de homicidios en Brasil, que cuenta con 175 millones de habitantes, alcanzó los 49.640 en 2002 contra 30.586 en 1993, con un aumento de 62,3%. El país sudamericano tiene el 2,8 por ciento de la población mundial, pero en él se cometen el 11% de los asesinatos del planeta. El estado brasileño que detenta el récord de homicidios de jóvenes es Río de Janeiro, con 118,9 asesinados cada 100 mil habitantes de 15 a 24 años en 2002; Río también lidera por su tasa de homicidios sobre la población total, que fue de 56,5 cada 100 mil habitantes, también en 2002 (*El Sur*, 08/06/2004). Asimismo, diversos informes colocan a Brasil como segundo consumidor de cocaína, después de los Estados Unidos, y liderando junto a Colombia, México y Rusia los países con mayor cantidad de secuestros. En este contexto, cabe enmarcar la convocatoria del presidente Lula a una conferencia hemisférica en el 2005 destinada a analizar la creciente ola de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado que se vive en los países del área. En su visión, se requiere una respuesta coordinada y multilateral de delitos y actores

transnacionales (*La Nación*, 09/10/2004). La carencia en Brasil de fuerzas policiales de alcance nacional como la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura argentinas o los Carabineros chilenos, han llevado al actual gobierno a avanzar en dos sentidos: 1.) impulsar la formación de una fuerza policial nacional; y 2.) desarrollar claras reglas de empeñamiento para las Fuerzas Armadas, en su carácter de única institución armada a escala nacional, para acciones puntuales contra el narcotráfico y el crimen organizado, quedando en manos del presidente la definición del espacio geográfico y la extensión en el tiempo de las mismas.

Como forma de hacer frente a la violencia, el Ministerio de Defensa de Brasil decidió poner un límite de 300 balas por año para las personas que tengan armas registradas. El texto fue elaborado por el Comando del Ejército del Brasil. Asimismo, el ministro José Alencar le asignó a las tres Fuerzas Armadas el derecho a emitir certificados de registro de armas de fuego. Los mismos, ahora serán confeccionados con papel moneda y servirá también como autorización para portar armas (*O Globo*, 01/12/04).

Durante el año 2004, el entonces ministro de Defensa del Brasil, José Viegas, expresó la necesidad de una fuerza policial de alcance federal para el país dado que es una de los instrumentos básicos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Asimismo, subrayó la posibilidad que esta futura fuerza recibiera instrucción inicial por parte de las Fuerzas Armadas y que sea conducida desde el Ministerio de Justicia (*Folha*, 02/05/04). Finalmente en el año 2005 tomaría forma la denominada Fuerza Nacional de Seguridad.

El Estado de Espírito Santo será el primer Estado brasileño en recibir ayuda federal en materia de seguridad por medio de la recientemente creada Fuerza Nacional de Seguridad. Esta fuerza, responde a la necesidad de contar con una agencia de seguridad que tuviera alcance nacional evitando que todo el peso de la asistencia de emergencia frente a cuestiones como el crimen organizado y la inseguridad recayeran exclusivamente sobre las Fuerzas Armadas en general y sobre el Ejército en particular (*O Globo*, 27/11/04).

No obstante el mayor énfasis en confrontar las “nuevas amenazas” o “amenazas no estatales”, Brasilia ha buscado lograr un equilibrio con los roles más tradicionales y disuasivos por medio de la adquisición de un portaaviones de origen francés, incorporación de vehículos blindados

alemanes y de los Estados Unidos, y la continuidad del programa de desarrollo de un submarino con propulsión nuclear, entre otros programas. A ello se suma la decisión política de subir el perfil en lo referente a Operaciones Multilaterales de Paz tal como lo demuestra el envío de 1,200 efectivos militares a Haití. No obstante, este protagonismo se ha visto complementado por serias dudas desde la misma Brasilia sobre el futuro de esta misión multilateral. El canciller del Brasil, Celso Amorin, destacó que las condiciones políticas en el país caribeño “vuelven imposible la reconciliación”. Asimismo, recordó que estas fuerzas “no son de policía, sino fuerzas de estabilización y que la estabilización implica un mínimo de entendimiento entre las distintas corrientes políticas haitianas”. Por último, cuestionó la falta de respaldo financiero por parte de los organismos internacionales de crédito al momento de colaborar en la acción internacional en Haití (*Clarín*, 03/12/04). La situación en Haití descrita por el canciller Amorin, se refuerza con la evaluación hecha por una Comisión especial de la ONU en donde se subraya: 1.) la subsistencia de milicias armadas; 2.) la falta de diálogo político entre las partes; 3.) el creciente rol del narcotráfico; 4.) la falta de una mayor cantidad fuerzas policiales internacionales; y 5.) la lenta llegada de la asistencia económica prometida por varios países desarrollados (International Crisis Group 2005).

Con un presupuesto de Defensa cercano al 2,1% del PBI, el sector de la Defensa de Brasil está saliendo lentamente de un contexto signado por un gran desinterés social y político por el tema. La situación crítica en Colombia en particular y en la zona andino-amazónica en general influyen en esto. Asimismo, el crecimiento económico y un marco de mayor estabilidad económica complementan esta tendencia. No obstante un punto no menor en la creciente consideración de la opinión pública, es la percepción del rol de las Fuerzas Armadas como sostén logístico y operativo de las fuerzas de seguridad en una violencia interna que presenta los indicadores antes mencionados.

La exportación de material bélico brasileño a Venezuela puede ser entendida dentro de un delicado equilibrio que Brasilia quiere mantener entre su objetivo de liderazgo en la región y su constructiva relación con Caracas, y la visión de ser considerado por Estados Unidos como un actor moderador de males mayores en la región. En este sentido, durante la reunión del ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, con su par de

los Estados Unidos, Donald Rumsfeld en abril del presente año, el funcionario brasileño enfatizó en la postura de Brasil de priorizar la no-injerencia en los asuntos internos de Venezuela y se negó a dar una opinión sobre las recientes adquisiciones de material bélico por parte de Caracas. Por último, criticó el accionar los grupos guerrilleros en Colombia pero no llegó a calificar como terrorista el accionar de los mismos. En el marco de los acuerdos bilaterales firmados por los presidentes de Brasil y Venezuela el 13 de febrero de 2005, Brasilia expresó su disposición de colaborar con la transferencia de tecnología para el desarrollo en Venezuela de un sistema de vigilancia aérea y terrestre como el SIVAM (de tecnología estadounidense y brasileña) que opera en Brasil (*Clarín*, 14/02/05).

Cabe recordar que declaración final de la sexta conferencia de Ministros de Defensa del hemisferio que se llevó a cabo en Ecuador a fines del año pasado, terminó sin incluir alguna de las propuestas impulsadas por el secretario de Defensa de los Estados Unidos. La brecha de visiones más grande se registró precisamente en el intercambio de opiniones entre Donald Rumsfeld y José Alencar, con respecto a la posibilidad de organizar una fuerza militar hemisférica para actuar en Colombia, así como por la conveniencia o no de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. La postura crítica de Brasil fue compartida en líneas generales por la Argentina y Chile. La delegación argentina expresó la necesidad de reforzar el respaldo político y diplomático a Colombia, sin que ello implique la intervención directa en operaciones militares. Asimismo, el secretario Rumsfeld llamó a juntar fuerzas dentro de los países (por medio de una mayor cooperación inter-agencias) y entre los países para hacer frente a amenazas sin fronteras como “el terrorismo, el tráfico de drogas, los secuestros y las bandas criminales”, argumentando que la interacción entre estos actores antisociales tienden a desestabilizar las sociedades americanas.

Un elemento a remarcar al momento de hacer referencia el Ministerio de Defensa de Brasil, creado en 1999, es la fuerte intervención que han tenido las Fuerzas Armadas en su creación, así como la gran cantidad de militares en actividad y en retiro que actúan dentro del mismo. En este sentido, muchos atribuyen a estos antecedentes la sustancial debilidad que hasta el momento han presentado los ministros de Defensa civiles

(Marques 2004). Ello quedó fielmente reflejado a fines del año 2004, momento en que luego de una crisis entre el ministro Viegas y el Comandante del Ejército, general Albuquerque, fue el primero de ellos quien fue finalmente removido de su cargo, sin que se viera afectada la continuidad del oficial en cuestión. Ello derivó en la decisión del presidente Lula de asignar el manejo de esa cartera al vicepresidente de la República, José Alencar.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas de Brasil, es el creciente peso que tienen agendas transnacionales de seguridad como el narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico de armas, crimen organizado, etc. en las prioridades de seguridad nacional del país. Ello coloca al sector de la Defensa del Brasil frente al desafío de logra mayores y mejores grados de coordinación entre las fuerzas militares, policiales, de inteligencia y de justicia y evitar la injerencia de potencias externas dentro de territorio o área de influencia del Brasil bajo excusa de luchar contra factores de inestabilidad global o hemisférica (Kalil Mathias y Fazio 2004). En este sentido, una mirada de los pasos dados por el Brasil en el campo de la Defensa, y aun en sus doctrinas, mostraría la presencia de hipótesis de conflicto tanto con los grupos armados irregulares de Colombia, con los carteles del narcotráfico pero también con la presencia militar de los Estados Unidos en la zona andina y amazónica. La escasez relativa de fondos que afrontan las Fuerzas Armadas del Brasil, se ve complementada por crecientes demandas del poder político y la sociedad para hacer frente a amenazas o desafíos convencionales y no convencionales (crimen organizado, narcotráfico, ayuda social, etc.). Esta tensión entre mayores demandas y recursos que no crecen en la misma medida, ha tenido como uno de sus efectos un mayor énfasis en el accionar conjunto de las Fuerzas y un incipiente debate sobre la necesidad de incrementar los gastos en Defensa (*Jane's Defence Weekly*, 20/04/05).

El objetivo implícito, y crecientemente explícito a partir de la llegada al poder de Lula, del Brasil es constituirse en “un organizador del espacio regional” y factor de moderación y estabilidad. Frente a sus limitaciones económicas, militares y sociales para ser un actor de peso central a escala global y el estar en el hemisferio de la superpotencia estadounidense, esa es vista como la opción más viable por los sectores diplomáticos y militares del país. De ahí los sostenidos esfuerzos para “regionalizar” la respuesta a temas como el narcotráfico y las crisis políticas y buscar man-

tenerse al margen en todo lo referido al tema del terrorismo internacional. En este contexto, el MERCOSUR tiene, o debería tener desde una visión pragmática, una dimensión básicamente política y geopolítica, y no meramente de intercambio económico (Sennes *et al.* 2004).

El caso de Argentina

La Argentina constituye una excepción a la tendencia antes descripta. Con un presupuesto de Defensa que a lo largo de las últimas dos décadas se ha reducido al 1,1% del PBI (con respecto al 3% de hace 20 años y el 2,5% promedio que existe en el ámbito mundial), el país se ha mantenido ajeno a importantes programas de reequipamiento. Como eventuales excepciones o lento cambio de tendencia, el Estado Nacional le ha asignado a la empresa argentina INVAP desarrollar once radares bidimensionales dentro del nuevo plan de radarización. El costo estimado de los mismos sería de 54 millones de pesos. Asimismo, la misma empresa fabricaría tres radares tridimensionales de uso militar dentro del mismo plan. Por último, se modernizarán los radares tridimensionales que actualmente tiene el servicio la Fuerza Aérea. El costo total del plan alcanzaría los 80 millones de dólares. Asimismo, la empresa Lockheed Martin invertirá 40 millones de dólares en su planta de Córdoba para fabricar un nuevo modelo del avión de entrenamiento AT-63 Pampa (*La Nación*, 11/12/04) o Super Pampa. El mismo es una versión mejorada del IA-63 Pampa y puede emplearse para entrenamiento avanzado de pilotos y misiones de apoyo de tropas en tierra. Colombia ha expresado su interés en adquirir estos aviones producidos por Lockheed Martin Argentina SA en el ex Área Material Córdoba. El total estimado de aviones alcanzaría a las 28 unidades por un valor total de 224 millones de dólares (de los cuales 4,7 millones serían para la Fuerza Aérea Argentina). A ello se sumaría el interés expresado por la Fuerza Aérea de Bolivia. Estas posibles exportaciones, se dan luego de la renovación del contrato entre el Estado Argentino y la empresa Lockheed Martin firmado en marzo de 2004 y con vigencia hasta el año 2009 (*La Voz del Interior*, 02/06/04).

La empresa americana Lockheed Martin Argentina anunció la firma de contratos con el Estado argentino, Chile, Bolivia y Colombia para el mantenimiento de aviones y producción de insumos. Los contratos son

para la fabricación de piezas aeronáuticas para el consorcio entre la empresa chilena Enaer y Lockheed Martin (proveedora de los aviones de combate F-16 C/D adquiridos por la Fuerza Aérea de Chile), la producción de piezas para un satélite argentino y el mantenimiento de aviones de transporte C-130 de la Fuerza Aérea de Colombia (*La Nación*, 04/08/04). Cabe destacar que las tareas de mantenimiento de los aviones C-130 de Colombia fueron consideradas una prioridad por el entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general James Hill. Asimismo, en mayo de 2005, el ministro de Defensa de la Argentina, José Pampuro, anunció que la empresa Lockheed Martin Argentina había ganado la licitación internacional convocada por el Brasil para realizar tareas de mantenimiento y reparaciones de los aviones de combate A-4 de la Marina del Brasil y que operan desde el portaaviones Sao Paulo adquirido a Francia en el año 2000. Asimismo, el funcionario destacó la posibilidad que en julio de 2005 haga su vuelo inaugural la versión repotenciada del avión de entrenamiento avanzado Pampa, el nuevo Super Pampa, destinado también a entrenamiento y ataque a tierra. El objetivo de la empresa y del gobierno argentino sería impulsar la exportación de este modelo, comenzando posiblemente con Colombia (*La Nación*, 12/05/05).

A su vez, durante la reciente visita a la Argentina del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, se le comunicó a Buenos Aires la decisión de Washington de levantar las restricciones que existían desde hace décadas en materia de intercambio de tecnología en materia de misiles aire-aire y tierra-aire. Asimismo, el Pentágono facilitaría la participación de empresas argentinas en ciertas licitaciones del sector de la Defensa en los Estados Unidos

La mayor solvencia de las arcas públicas y lo que podría ser visto como una cierta revalorización del sector de la Defensa Nacional por parte de la sociedad y su dirigencia, explicarían que Fuerzas Armadas de la Argentina cuenten actualmente con el mayor presupuesto operativo de los últimos diez años (*La Nación*, 21/03/05). El presupuesto asignado por el presupuesto Nacional del año 2005 al sector Defensa, creció en un 7,9% con respecto al 2004 y representa el 6,5% del gasto federal. No obstante, ello sólo debería ser visto como un primer paso en un regreso a estándares más compatibles con el promedio regional (*La Nación*, 24/09/04).

Reflexiones finales

Este repaso sobre el panorama de la adquisición de armamentos en Sudamérica nos muestra un panorama que trasciende los casos de Colombia y Venezuela. Tanto sea por la subsistencia “rivalidades duraderas” (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia-Venezuela, etc.), por crisis político-sociales que impulsan a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales (con su consecuente impacto en la seguridad interior de los Estados y en sus cuestiones limítrofes con otros países), la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelven a ocupar el centro de la escena. Dependerá de la madurez de los decisores y sus sociedades, así como en una constructiva influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y una política constructiva y a largo plazo de los Estados Unidos, que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales. En otras palabras, una potencial combinación del lado oscuro de la denominada globalización y de la *realpolitik* del pasado.

Desde hace casi ya tres décadas, existe una difundida percepción acerca de una creciente brecha entre una visión de seguridad brasileña centrada en la región amazónica y en la situación de violencia y ausencia del monopolio del uso de la fuerza en Colombia y una Argentina que buscaba en las Operaciones Multilaterales de Paz (OMP) y en los ejercicios militares combinados con otros países formas de darle un nuevo perfil al sector de la Defensa. Si bien ello no implica desconocer el creciente rol que Brasil le está otorgando a las OMP, tal como lo reflejan sus 1.200 efectivos en Haití, o la adquisición de material bélico muy ligado a la disuasión, resulta innegable el peso que tiene en la visión de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas brasileñas la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en sus diferentes variantes. Los niveles de violencia registrados en algunas de sus grandes ciudades han llevado al actual ministro de Justicia a calificarlas como verdaderas “guerrillas urbanas” (no por su carga ideológica, sino por su poder de fuego más propio de escenarios de combate irregular como Irak). Ello ha potenciado un giro hacia un creciente acercamiento y cooperación con el gobierno colombiano y otros países vecinos.

Llegado a este punto, cabría reflexionar sobre la posibilidad que la Argentina y Brasil en particular, y la región en general, encuentren en este listado de desafíos a la seguridad ciudadana y a la seguridad nacional un verdadero espacio para la convergencia de percepciones y desarrollo de políticas que le den al MERCOSUR un mayor contenido e identidad en materia política y de seguridad. La problemática de la seguridad ciudadana y su interacción más o menos directa con amenazas transnacionales están ocupando actualmente el tope del listado de prioridades de las sociedades de América Latina, el Caribe y aun de ciertas zonas de los Estados Unidos cercanas a México. Ni el propio Chile, con su carga de estabilidad económica y dotado de un Estado con instituciones más sólidas que el promedio regional, escapa a esta regla tal como lo reflejan recientes encuestas.

Los propios Estados Unidos podrían ver en estos esfuerzos regionales (Sudamérica) y subregionales (MERCOSUR) como complementarios y funcionales a la lucha contra lo que funcionarios de primer nivel de Washington en temas de seguridad definen como la peligrosa interacción entre terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, debilidad institucional, corrupción y zonas no gobernadas.

Todo lo expresado no implica licuar las diferencias más o menos sustanciales que existen entre nuestros países en materia de seguridad y Defensa, o asumir que todas las sociedades le otorgan el mismo peso a la movilización y uso político-electoral de estos temas, pero sí representa una realidad que deberá ser afrontada por los decisores políticos al momento de plantearse caminos conducentes hacia mayores grados de integración. Los escenarios políticos y sociales existentes en países como Bolivia y Ecuador, la escalada verbal y de gestos entre Caracas y Washington, y la existencia de síntomas sobre una agudización del conflicto en Colombia (y su eventual derrame en la zona andina y amazónica), no hacen más que reforzar este deseable curso de acción.

En síntesis, mientras aun queda un sustancial camino por recorrer en materia de cooperación, ejercicios combinados que trasciendan el formato de operaciones humanitarias (tal como es el caso de los Ejércitos de Argentina y Chile desde 1997) y medidas de confianza mutua en el sector de la Defensa, los países del Cono Sur y de Sudamérica en términos generales enfrentan el complejo desafío de buscar respuestas compartidas y coordinadas a factores de riesgo y amenazas tales como el nar-

cotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y la presencia de milicias/bandas armadas. Todo ello coloca a nuestros Estados frente al reto de lograr un equilibrio entre todo lo que queda por avanzar para atenuar aun más las visiones más tradicionales de la Defensa y la seguridad (equilibrio de poder, disuasión y rivales/enemigos “con código postal”) y una ascendente agenda que combina amenazas domésticas y transnacionales, y frente a la cual la clásica división entre Defensa y seguridad doméstica se borrona crecientemente.

Bibliografía

Libros y artículos

- FERRARDAS, Carmen Alicia (2004): “Environment, security and terrorism in the trinational frontier of the Southern Cone”. En: *Identities: Global Security in Culture and Power*, 11 (3), Taylor & Francis.
- INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2005): “Update on Haiti”. UN Security Council, 8 April 2005. Disponible en: <http://www.crisisgroup.org/>
- KALIL MATHIAS, S., y FAZIO, E. (2004): “Nuevas amenazas y su impacto sobre las Fuerzas Armadas de Brasil”. En: *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, 18 (3), Santiago.
- MARES, D. (2001): *Violent Peace: militarized interstate bargaining in Latin America*, New York, Columbia University Press.
- MARQUES, A. (2004): “El Ministerio de Defensa de Brasil: limitaciones y perspectivas”. En: *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, 18 (3), Santiago.
- SENNE, R.; ONUKI, J. y OLIVEIRA, A. Jorge de (2004): “La política exterior brasileña y la seguridad hemisférica”. En: *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, 18 (3), Santiago.

Fuentes periodísticas

- Aviation Week & Space Technology*, en: <http://www.aviationnow.com/>
- Clarín*, de Buenos Aires, en: <http://www.clarin.com.ar/>
- Defense News*, en: <http://www.defensenews.com/>
- El Mercurio*, de Santiago, en: <http://www.elmercurio.cl/>

El Sur, de Acapulco, en: <http://www.suracapulco.com.mx/>
El Tiempo, de Bogotá, en: <http://eltiempo.terra.com.co/>
Folha, de Sao Paulo, en: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/>
Jane's Defence Weekly, en: <http://jdw.janes.com/>
La Nación, de Buenos Aires, en: <http://www.lanacion.com.ar/>
La Tercera, de Santiago, en: <http://www.tercera.cl/>
La Voz del Interior, de Córdoba, en: <http://www.intervoz.com.ar/>
O Globo, de Río de Janeiro, en: <http://oglobo.globo.com/jornal/>
The Miami Herald, de Miami, en: <http://www.miami.com/>
The New York Times, de Nueva York, en: <http://www.nytimes.com/>

FABIÁN CALLE es profesor de la UCA, Investigador Senior en el CARI e Investigador del CONICET. Master en Relaciones Internacionales (Università di Bologna), Master en Relaciones Internacionales (FLACSO), egresado de la National Defense University (Estados Unidos), y licenciado en Ciencia Política (UBA).